TRABAJO SOCIAL Y DESOCUPACION

Ana Luisa González
Docente
Esc. Trabajo Social U.C.

En el Editorial de la Revista Nº 25 aparecida en los meses de junio y julio de 1978, hacíamos una reflexión sobre la Desocupación y el Trabajo Social y anunciábamos la realización de una investigación sobre el tema.

Dijimos entonces que Chile, que ha sido un país crónicamente afectado por el desempleo, ha tenido, sin embargo, dos momentos históricos en que el problema se ha hecho sentir con mayor rigor. En el primero, por allá por los años 1931-1932 al Servicio Social le cupo una importante labor. La preocupación nuestra, como Escuela de Trabajo Social, era conocer en qué forma están, hoy, los Asistentes Sociales enfrentando la dramática situación de la Desocupación que vive el país.

Los interrogantes planteados han sido muchos: ¿cuáles son los resultados de la aplicación de las distintas estrategias con que se ha abordado el problema? ¿Cómo se aplican las disposiciones del Empleo Mínimo? ¿Qué sucede con la capacitación ocupacional?, ¿con los diversos esfuerzos privados, con los nuevos beneficios previsionales? ¿Cuál ha sido, cómo y dónde el aporte profesional entregado?

Los tópicos posibles de estudiar eran muchos, pero la necesidad de delimitar los temas, circunscribió la investigación a los programas sociales de Gobierno para la desocupación y al conocimiento del rol y funciones que en ellos desempeñan los Asistentes Sociales (*).

Como dichos programas se implementan y ejecutan a través de las Municipalidades, la investigación iniciada, más bien, con un enfoque laboral social, nos fue aproximando, y nos enfrentó a una importante temática, de gran vigencia para el trabajo social, que es el desarrollo comunitario y social con las nuevas perspectivas que para el Servicio Social Muni-

cipal se dan ante el rol social otorgado al Municipio por la ley Nº 12.289.

A continuación entregamos una síntesis del Informe de la Investigación. En la primera parte abordaremos el Trabajo Social y la Desocupación. En un artículo posterior entregaremos una visión sobre el Servicio Social en las Municipalidades.

Desocupación en Chile

Es un hecho indiscutible que el aspecto económico más afectado por la política de estabilización, aplicada por el Gobierno a partir del año 1974, ha sido el del empleo u ocupación.

El país enfrenta desde el año 1975 uno de sus más grandes períodos de desocupación. En marzo de 1976, de acuerdo a la encuesta de ocupación que realiza el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, se registró en el Gran Santiago una tasa de desocupación del 19,9%.

El volumen creciente en los primeros años del período 1973-1978, y después decreciente, pero siempre relevante, puede apreciarse en el siguiente cuadro que refleja la variación de la tasa de desocupación registrada por la encuesta, para el Gran Santiago, hasta junio de 1978. (Ver cuadro en página siguiente).

Cuando se registró el punto más alto de desocupación, la fuerza laboral del Gran Santiago era de alrededor de 1.300.000 personas, de las cuales el 80,2% estaba ocupada y el 19,8%, esto es, 257.600 personas, estaban desocupadas. El porcentaje de desocupación incluía a un 14,8% de cesantes y un 5,1% de personas que buscaban trabajo por primera vez. Los más altos volúmenes de cesantes provenían del sector industrial manufacturero, con el 31,2%; de la construcción, con el 19,6%, y de los servicios personales y de los hogares y el sector comercio, ambos con porcentajes de alrededor de un 14%.

En los meses siguientes las cifras de desocupación han ido bajando; sin embargo, su descenso ha sido muy leve y no correspon-

(*) Otros aspectos como: esfuerzos del sector privado para absorber la desocupación en el Gran Santiago en los años 1974-1978, y la implementación de la capacitación al PEM en cuatro comunas de Santiago, fueron abordados a través de tesis de grado.

VARIACION TASA DE DESOCUPACION GRAN SANTIAGO Período 1973-1978

	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Marzo	3.8	9.2	13,3	19.9	13,9	13.5
Junio	3.1	10.3	16.1	18.0	13.0	12.8
Septiembre		9.4	16.6	15.7	12.8	
Diciembre	7.0	9.7	18.7	13.6	13.2	

de a las expectativas planteadas por los economistas; de tal manera, que en el año 1978 el problema seguía siendo considerado tan grave por el propio Gobierno, como para ser prioridad de atención en los programas ministeriales y para ser estimado por la opinión pública del país como el problema que más preocupa a la gran mayoría de los chilenos.

La situación es alarmante, no sólo por el volumen de las tasas de desocupación conocidas, sino por la magnitud de los aspectos sociales y políticos involucrados en él.

Una de las principales características, es que la desocupación en la actualidad, ha afectado a sectores de diferente situación laboral y diversos estratos sociales.

La disminución de fuentes de trabajo en diversos sectores económicos ha llevado a una situación de cesantía real a trabajadores habituales que habiendo tenido un trabajo lo han perdido y, enfrentando por primera vez este hecho, han venido a sumarse a los cesantes crónicos o trabajadores marginales. Estos últimos han visto así disminuidas las posibilidades de salir de su desocupación. Por otra parte, se ha incrementado el número de los que buscan trabajo por primera vez.

El cesante crónico que nunca ha trabajado en forma estable por falta de una mínima capacitación laboral, por problemas culturales, físicos, síquicos o sociales, siempre ha tenido un bajo nivel socioeconómico y ha presentado problemas de insatisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud, los que se han visto agudizados al mismo tiempo que se han alejado las posibilidades de obtener empleo, hoy, al competir en la búsqueda de trabajo con trabajadores especializados, con años de experiencia, con capacidad y habilidad.

Las implicancias del fenómeno de cesantía, desempleo y bajo ingreso, en todos los sectores afectados se dan en el plano personal, familiar y propiamente social.

A nivel personal y familiar se producen desajustes psicológicos y emocionales, alteracio-

nes de status y roles, deterioro de las relaciones familiares, alteración de los niveles de educación y salud y especialmente repercusiones en la vida y actividades de los jóvenes y menores.

Otra característica que reviste la desocupación actual es el aumento del tiempo de cesantía. En el caso de la cesantía de un obrero industrial, que para la década anterior al año 1960 era de 1 a 3 meses, ha aumentado a un período de más de 2 años.

La prolongación de la cesantía agrava las consecuencias sociales que el fenómeno trae consigo, y los que la padecen deben recurrir a los más diversos mecanismos en su intento de superar la situación.

Los resultados dados a conocer el año 1977 por el Documento de FLACSO "Cesantía y Estrategias de Supervivencia" y que corresponde a un estudio sobre los mecanismos diseñados por los sectores populares para enfrentar la situación de pobreza y cesantía, señalan que la primera estrategia es la búsqueda de trabajo.

Esto es un proceso que varía según el tipo de actividad económica; así, por ejemplo, en el caso de un obrero industrial comienza en el trabajo solicitado en industrias similares para mantener el oficio; pasa después por la búsqueda de cualquier tipo de trabajo y llega finalmente a recurrir al "pololo". En primera instancia trata de que este "popolo" sea afín a su actividad u oficio, pero luego se ve obligado a aceptar cualquiera, incluso al más alejado de su especialización.

El "pololo" es una actividad laboral, esporádica, ocasional, de carácter no productivo, que en los sectores populares es una sustitución característica de la economía subdesarrollada del país y se ha constituido en uno de los mecanismos más recurrentes para sobrevivir en tiempo de cesantía.

Como una segunda estrategia se señala la reducción de gastos y enseres que también presenta una secuencia progresiva. Se inicia con la reducción de la alimentación y el ves-

tuario, luego el menaje, especialmente de los artículos electrodomésticos, después, las herramientas de trabajo y finalmente el desprendimiento de los servicios públicos como la luz eléctrica y el agua potable.

Las estrategias siguientes se refieren a la solidaridad familiar reflejada en un reforzamiento de la sociedad primaria por la concentración familiar física; la incorporación al mercado de trabajo de otros miembros del grupo familiar, especialmente de la mujer, los jóvenes y los niños, quienes por no tener calificación se inician, generalmente, en actividades de servicio o comercio ambulante. Como otras estrategias frente a la prolongación de la desocupación y la extrema pobreza se conciben la demanda de ayuda vecinal y de organismos asistenciales oficiales y no oficiales.

Finalmente, y como estrategias extremas, se dan las emigraciones y las conductas desviadas, como la delincuencia, la drogadicción y la prostitución.

Ahora bien, si intentáramos buscar los orígenes de este fenómeno del desempleo, tan estrechamente ligado a la pobreza, que como un verdadero flagelo social afecta a la humanidad y especialmente a América Latina, veríamos que en los países en vías de desarrollo aparecen factores relacionados con baja industrialización e insuficiente desarrollo tecnológico que impiden un aprovechamiento cabal de los recursos materiales y humanos.

En Chile, tanto la desocupación como la inflación son tradicionales y sus raíces se remontan al siglo pasado. Sin embargo, entre los antecedentes inmediatos encontramos lo siguiente:

Los intentos de aplicación del modelo económico sustentado por el Gobierno de la Unidad Popular, entre los años 1970 y 1973, significaron que el actual Gobierno encontrará al país en una crisis económica caracterizada por un acelerado proceso inflacionario, déficit fiscal, aumento de la deuda externa, crisis en la balanza de pagos y desajustes entre la oferta y la demanda de la producción.

Estos graves problemas de política a corto plazo que tuvo que enfrentar el Gobierno, implicaron una política de reducción del gasto fiscal en un 15% (Plan Cauas); la disminución del gasto fiscal trajo como consecuencia la reducción del gasto del Estado en vivienda y obras públicas, factores que tradicionalmente dinamizaban la producción y el empleo. Por otro lado, la inversión se vio afectada por la inflación y la mayor productividad del mercado de capitales.

Las consecuencias de la situación descrita se observan en la depresión económica,

en la pérdida del poder adquisitivo y en la desocupación, producida directamente como consecuencia de la racionalización de la administración pública que disminuyó muchas plazas en esta área de empleados; los despidos masivos en las Industrias y el impacto en el comercio y la construcción.

Por otra parte la crisis interna del país, fue agravada por la crisis internacional que se produjo en el segundo semestre de 1974 y que ha sido la más grave de que se tenga conocimiento en el mundo contemporáneo.

La crisis externa significó la brusca caída del precio del cobre, que ese año 1974 llegó a menos de la mitad de lo que fue su punto más alto el mismo año y se mantuvo deprimada en los niveles más bajos de las últimas décadas, desde entonces hasta ahora. En el curso de 2 años se sextuplicó el precio del petróleo y se encareció fuertemente el precio mundial de los alimentos.

La situación interna y externa descrita conmovió fuertemente al país y el Gobierno se vio en la necesidad de implantar un plan de recuperación económica, sustituyendo el modelo económico anterior por uno de economía social de mercado. Este modelo supone una apertura al comercio exterior y el término de la protección a la industria nacional, la que debe entrar ahora a competir con los productos extranjeros, a los que se les rebajan los aranceles aduaneros para su importación.

El modelo económico aplicado significa, además, cambios en la importancia de los sectores. La industria ve reducida su importancia frente a la agricultura, la ganadería y la pesca.

El Plan de recuperación económica ha tenido efectos positivos en otros aspectos, sobre todo económicos, proplamente, como son la disminución de la inflación, la reducción del déficit fiscal, el equilibrio de la balanza de pagos y la disminución de la dependencia del país de las exportaciones de cobre. No obstante, dicho Plan no ha logrado tener igual repercusión en lo social porque no ha conseguido compatibilizar los logros económicos señalados con la creación de fuentes de empleos suficientes.

Este hecho encuentra su explicación en la aparición de un fenómeno de carácter estructural que ha incidido en el sector Empleo. Tal fenómeno es el crecimiento significativo, superior al normal, de la fuerza de trabajo que hace que las tasas de desocupación no se reduzcan en magnitudes mayores a pesar de que se incrementa el número de personas ocupadas. Al respecto se señala que desde noviembre de 1976 a la fecha la economía ha generado 150 mil nuevos empleos.

En nuestro país la fuerza de trabajo es una fracción pequeña de la población total, lo que hace que esta variable tenga posibilidades de cambio tanto por aumento de la población como por estímulos de naturaleza económica:

El cambio por aumento de población se explicaría por las altas tasas de crecimiento de la población durante los últimos 20 años y que sólo han disminuido en los últimos tiempos

El cambio por estímulos económicos se explicaría principalmente por el aumento del salario real que produce un encarecimiento del ocio y estímulo a mayor número de personas a incorporarse a actividades remuneradas. El aumento del salario real a su vez se relaciona con la tasa de inflación decreciente, la política de reajustes periódicos y algunas medidas específicas como los reajustes especiales a la Escala Unica de Sueldos, la rebaja del impuesto único al trabajo, el aumento de las asignaciones profesionales y bonificaciones y la supresión de los últimos grados de la Escala Unica de Sueldos.

Políticas y programas para enfrentar la desocupación

Las actuales políticas de desarrollo social se orientan a: asegurar la igualdad de oportunidades a todos los chilenos y erradicar la extrema pobreza; fomentar el empleo y lograr una plena participación e incorporación de la población a los beneficios del desarrollo.

La política del gobierno, ante la magnitud de la desocupación, ha orientado sus medidas en dos sentidos: procurar un incremento acelerado de la ocupación y reducir los problemas sociales.

Entre las medidas que tienden a incrementar la ocupación se encuentra una serie de Decretos Leyes dictados entre los años 1974 y 1977 y que se refieren a: la extensión del subsidio de cesantía al sector obrero; la estructura y funcionamiento de las Empresas y su responsabilidad social; el otorgamiento de un subsidio a la contratación adicional de mano de obra, y dos medidas destinadas a producir un gran efecto sobre la desocupación y que son la capacitación ocupacional de los trabajadores y el fomento del empleo, ambas contenidas en el Decreto Ley 1.446 del año 1976 denominado "Estatuto de Capacitación y Empleo".

A mediados del año 1978, ODEPLAN dio a conocer el llamado "Plan de Fomento al Empleo y eficiencia en la acción social" que contiene algunas medidas como la eliminación en un plazo de 4 años de las cotizaciones previsionales, la aprobación de la Reforma previsional,

la desactivación del sueldo mínimo, las reformas a la ley de inamovilidad, etc.

Entre las medidas tendientes a reducir los efectos sociales de la desocupación se halla el Plan del Empleo Mínimo dentro de la Campaña Nacional Social iniciada en mayo de 1975 y orientada, prioritariamente, a paliar la extrema pobreza en la cual se encuentra aproximadamente el 22% de los chilenos. Para el cumplimiento de este objetivo cuenta con otros 5 programas: Alimentación Complementaria, Alimentación Escolar, Atención y Educación Parvularia, Viviendas Sociales y Abastecimiento y Distribución.

A través de todos ellos se centraliza y coordina la acción social del gobierno orientada a los sectores más necesitados.

También el sector privado ofrece, especialmente a los grupos más desfavorecidos, algunas alternativas o perspectivas de solución que se canalizan en programas que tienen diverso origen y cubren variados rubros y niveles de necesidades.

Algunos programas son de iniciativa profesional, religiosa, ya de la Iglesia Católica o de otras Iglesias y de iniciativa laica, especialmente de sectores económicos productivos o empresariales.

Entre los primeros destacan los programas de la Vicaría de la Solidaridad, especialmente las bolsas de cesantes, comedores populares, consultorios médicos, asesoría a organizaciones sindicales y atención jurídica a trabajadores despedidos injustificadamente; los programas sociales de emergencia y la capacitación laboral de Caritas Chile y otras iniciativas como el Fondo Económico Solidario (FES), la fundación para el Desarrollo y el Instituto de Autogestión.

De las otras Iglesias merecen nombrarse Diaconía Chile, Ayuda Cristiana Evangélica, (ACE) y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), todas ellas destinadas a concertar los esfuerzos e inquietudes para un trabajo social en favor de los que tienen necesidades de orden moral o material.

Entre las iniciativas privadas de tipo laico se encuentran la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social que nació como respuesta del sector privado al llamado del Gobierno a colaborar en el desarrollo social y en la erradicación de la extrema pobreza, y la Corporación Industrial para el Desarrollo del área Metropolitana de Santiago (CIDEME), cuya finalidad es crear nuevas fuentes de trabajo en sectores urbanos y rurales del área metropolitana, utilizando mucha mano de obra, tecnología simple y un creciente aprovechamiento de los recursos naturales tanto industriales como agrícolas.

El PEM y los otros programas oficiales

En virtud de la política del Gobierno de centralizar la acción social en el Municipio, los 3 programas para la desocupación se están ejecutando a través de todas las Municipalidades a lo largo del país.

El Plan del Empleo Mínimo, cuyo objetivo es absorber cesantía y desempleo de mano de obra no calificada, es una medida de corto plazo para abordar el problema coyuntural, y constituye un subsidio momentáneo mientras la economía recupera sus niveles normales de actividad.

El subsidio dirigido a solucionar en parte las dificultades que la falta de trabajo provoca en las familias de más bajos ingresos, exige que los adscritos al programa cumplan una jornada laboral con el doble fin de propender a la dignificación de las personas que se encuentra en situación de cesantía, y para incentivar la responsabilidad laboral.

El subsidio se complementa con algunos beneficios como la atención médica para el beneficiario y sus cargas, a través del S.N.S. y la Asistencia Nutricional a través del programa PAN-PEM.

En junio de 1978 había en la región metropolitana 23.757 adscritos al PEM, los que con sus cargas familiares constituían un grupo humano de más de 100.000 personas beneficiadas con el programa.

De este grupo de beneficiarios PEM se puede acotar que, aproximadamente, un 70% eran hombres y el 30% mujeres, y que la mitad del grupo provenía de los sectores productivos y de la construcción.

El Decreto Ley 1.446 creó un sistema de empleo a nivel nacional con una organización administrativa que determina que en cada Municipalidad debe funcionar una Oficina de Colocaciones, destinada a realizar un conjunto de acciones para relacionar a quienes buscan ocupación con quienes la ofrecen, con el fin de celebrar un contrato de trabajo.

La razón de ser de estas Oficinas de Colocación es lograr el mayor aprovechamiento de los recursos humanos a través de la capacitación de la fuerza de trabajo, el conocimiento del mercado laboral y una labor de orientación hacia los empleos de posibilidades más reales en cada momento.

En el primer trimestre de 1978, se habían inscrito en 15 Municipalidades del Gran Santiago, 7.857 desocupados y éstos habían recibido oferta de 4.222 empleos. La colocación fue del 28,6% de los inscritos y el aprovechamiento de las vacantes de más o menos un 50%.

Estos inscritos procedían mayoritariamente de la actividad económica de servicios comunales y personales y eran en su mayoría obreros urbanos, varones de entre 15 y 24 años de edad y con estudios inferiores a VI año básico.

El Estatuto de Capacitación y Empleo propone la capacitación a nivel nacional para todos los trabajadores y además para los beneficiarios del PEM, cesantes y desocupados que buscan trabajo por primera vez y que se encuentran inscritos en la Oficina Municipal de Colocación.

En ambos planes participa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, quien impulsa y coordina la capacitación ocupacional a nivel nacional y administra el sistema de becas. Los organismos técnicos de capacitación reconocidos por SENCE ejecutan la capacitación; las Municipalidades orientan y motivan a los beneficiarios PEM, a los inscritos en colocación y además inscriben, seleccionan y evalúan la capacitación del PEM.

Dada la baja escolaridad de los beneficiarios del Empleo Mínimo, el programa de capacitación considera también un plan de alfabetización que ejecuta la Secretaría Nacional de la Mujer.

En 1977 en la región metropolitana se realizaron 355 cursos de capacitación, correspondientes éstos al 80% de lo programado. En cuanto a las vacantes que el Plan asignaba a la misma región y que eran cerca de 10.000, aunque se utilizaron con matrícula aproximadamente un 70%, su aprovechamiento real fue solamente de un poco más del 50% debido a los casos de reprobación y deserción.

Más allá de lo que hablan las cifras y de la buena intencionalidad de estos programas, cuyos objetivos están bien a nivel de formulación, está la realidad de su aplicación, de su puesta en marcha en las distintas realidades concretas. En su operatividad hay problemas, hay vacíos, hay fallas administrativas que a veces malogran la planificación. Existen problemas de coordinación, de información y difusión, de participación de la comunidad, del voluntariado, de recursos humanos y materiales.

La información de los aspectos cualitativos de estos programas, entregada por Asistentes Sociales y funcionarios, nos permitió conocer aspectos positivos y negativos. A vía de ejemplo señalaremos, entre lo más positivo, algunos esfuerzos por hacer realidad la idea de asistencia integral a través de los diferentes programas de la campaña y el intento de aplicar, paralelo a ellos, un proyecto extraprogramático de tipo recreativo y cultural. Entre lo más negativo, la insuficiencia de vacantes en relación a la postulación al PEM en aquellas

comunas donde existe mayor concentración de extrema pobreza; el atraso prolongado o indefinido de la entrega del paquete de alimentos a los beneficiarios, así como su entrega discriminada.

Existe meridiana claridad de la persistencia del desempleo en contraste con la evolución positiva de otros sectores. El problema es grave y dramático porque afecta a un importante número de chilenos y porque acarrea consecuencias sociales serias a los afectados y sus familias, y porque repercute fuertemente sobre la ya tradicional problemática sicosocial de los sectores de la población más desposeídos.

Las medidas económicas no han logrado el resultado esperado, el mercado del empleo tiene un alto grado de distorsiones y trabas. Las medidas para paliar sólo los efectos sociales son insuficientes, pero deben mantenerse, mejorarse y diseñarse algunas nuevas medidas, en tanto se logra solucionar el problema de fondo.

El Plan del Empleo Mínimo no es una alternativa al empleo estable, es una mala solución para muchos y es más bien un paliativo a la extrema pobreza de los estratos más bajos de la fuerza laboral. Esto es corroborado por la evidencia de que los postulantes al PEM han sido hasta ahora los cesantes crónicos por incapacidades físicas o mentales, los trabajadores habitualmente "pololeros", los ancianos sin recursos, los jubilados de bajas pensiones, las mujeres viudas, abandonadas, las cónyuges de cesantes; los muy jóvenes que buscan trabajo por primera vez sin ninguna capacitación laboral y con estudios incompletos.

Para el hombre, para el jefe de hogar, por lo bajo del subsidio, el PEM es una mala solución a su cesantía y lo considera como último recurso, incluso después del "pololo". La mujer, que ha tenido que salir a buscar trabajo por primera vez, lo considera un recurso para aumentar los ingresos del hogar, de mejor status que los tradicionales lavados y servicios domésticos.

El mérito esencial del PEM ha sido el de ser un vehículo para la capacitación ocupacional. Ha sido también un aporte muy importante para el adelanto de algunas comunas; se han reparado edificios públicos, hermoseado plazas y jardines y se ha logrado un gran mejoramiento en la infraestructura del país a través de la construcción de calles, canales, puentes, etc. No obstante esto, si bien es económicamente bueno porque los trabajos se realizan a un costo hasta 10 veces menor de lo que valdrían realizados con particulares, es socialmente grave si es, aunque con una inten-

ción transitoria, sustitución de empleo estable y si se considera que la mano de obra que los ha realizado corresponde a la única opción que les cupo a trabajadores cesantes.

La capacitación ocupacional, aunque puesta en marcha desde hace menos tiempo, puede, sin embargo, ser evaluada en algunos aspectos.

Su planificación está en algunos aspectos desvinculada de la realidad social.

Debe ser mejor implementada, más orientada al mercado ocupacional. Debe haber mayor flexibilidad para la programación de cada comuna, de acuerdo a su realidad; necesita que los programas de los cursos sean más profundos y con más posibilidad de enseñanza práctica, a la vez que más adecuados al nivel de escolaridad de aquellos a quienes va dirigida.

Debe hacerse un seguimiento de los capacitados. Un estudio realizado por alumnos de Trabajo Social, constató que un grupo de capacitados en 4 comunas de Santiago, a los 10 meses de recibida la capacitación, un 8,5% de ellos estaba todavía cesantes o adscritos al PEM, logrando por lo tanto utilizar los conocimientos adquiridos sólo para mejorar habilidades personales o en el hogar. De esta manera no se estaría cumpliendo el objetivo básico de la capacitación ocupacional que es procurar mayor productividad y mejor ingreso.

La oficina de colocación, por problemas de recurso humano no puede hacer un contacto más efectivo con las industrias de la comuna y tampoco se ha logrado por otros conductos un mejor interés de los empresarios por este Programa. Por otra parte, como ofrecen mayoritariamente mano de obra no calificada y los futuros empleadores piden calificación y experiencia, hay un desfase que tiene que ser cubierto por un buen sistema integrado de capacitación.

El Servicio Social Profesional, que se propone en cada época y circunstancia dar respuesta adecuada a las demandas de la realidad social, no está dando un aporte significativo al problema de la desocupación, a lo menos en lo que a los programas oficiales se refiere.

Debería hacer un aporte a la política social evaluando técnicamente, en términos cualitativos, estos programas.

Debería contribuir al diagnóstico dinámico de los aspectos sociales de la desocupación, por áreas y sectores.

En las Municipalidades debería tener acceso a modificar y adaptar los lineamientos programáticos a la realidad de la comuna, a promover; asesorar y capacitar talleres laborales; a difundir el Programa de Capacitación que

actualmente es sólo informativa pero adolece de motivación y orientación.

También está en condiciones de hacer un aporte a la capacitación social, a formar monitores para capacitación, a detectar líderes naturales, a diseñar formas e instrumentos para el seguimiento de los capacitados; a participar en la motivación de los empleadores.

Siendo los beneficiarios PEM aquellos sectores que, por definición profesional constituyen el objeto prioritario del trabajo social, debe interesarse y tratar de hacer un aporte eficiente y eficaz aún frente a la aplicación de medidas paliativas.

Es cierto que los objetivos últimos de la profesión orientan su acción en una perspectiva de desarrollo, pero no es menos cierto que no pueden dejar de contribuir a aliviar las necesidades básicas y urgentes de quienes están impedidos de hacerlo.

Las circunstancias históricas del problema hacen imperativas estas formas paliativas y creativas de trabajo complementadas con otras instancias que ya se han mencionado.

Una acción preventiva y constructiva en relación a la desocupación misma tal vez sería posible a nivel del sector privado y, sobre todo, en algunos loables esfuerzos de creación de fuentes de trabajo que carecen del apoyo del recurso humano y técnico para dar soluciones más amplias.

Le cabría en ellos la orientación, la promoción organizacional, la coordinación con los programas de Gobierno para la complementación de recursos, en especial, el de la capacitación.

Visión crítica de la labor del Asistente Social en los programas de desocupación

Con miras a conocer la participación del Servicio Social en el programa de la desocupación, se inició una investigación cuyo objetivo consistía en evaluar el rol del Asistente Social en esta materia. Como la totalidad de la política social gubernamental se canaliza a través de los municipios, la investigación se centró en ellos y en las dependencias del Ministerio del Interior a los cuales corresponde su formulación.

En la División de Desarrollo Social del Ministerio del Interior, el Servicio Social tuvo un rol importante en la etapa de planificación del Plan del Empleo Mínimo. Hoy tiene injerencia en él, en la medida en que participa en equipos interdisciplinarios que coordinan y evalúan la Campaña Nacional Social a nivel nacional. En la Intendencia de Santiago la función preponderante del Servicio Social es de asesora

ría técnica, de coordinación de los programas a nivel de alcaldes de la región metropolitana, de centralización de información de la Campaña y de asesoría al Servicio Social Municipal para la interpretación de normas y procedimientos. En las Municipalidades los Asistentes Sociales cumplen, frente a los programas de desocupación (PEM, Capacitación y Oficina Municipal de Colocaciones) acciones no estructuradas, esporádicas y de menor importancia dentro del conjunto de su trabajo. Se constató que, de los tres programas, el Servicio Social participa mayormente en el PEM actuando a nivel de ejecución. Las tareas que allí realiza son las de orientación a través de atención a potenciales beneficiarios, de asesoría al Comité PEM y de atención a casos individuales. Sólo en 6 Municipalidades del Gran Santiago el Servicio Social participa en el proceso de selección de postulantes y en dos de ellos, programa y evalúa. En una Municipalidad, por falta de personal administrativo, el Asistente Social tiene que organizar la inscripción de postulantes.

Frente al programa de Oficina Municipal de Colocaciones, la labor del Asistente Social es sólo de ejecución y consiste en la orientación y coordinación del programa con la capacitación que se ofrece a los que buscan trabajo.

En Capacitación, la labor del Servicio Social —presente a lo menos en 6 Municipalidades— corresponde concretamente a motivar a los beneficiarios del PEM para tomar cursos, así como a establecer una coordinación entre estos programas municipales y los organismos de capacitación. Las acciones de Diagnóstico y Programación se reducen a un mero sondeo de las ofertas de trabajo en la comuna y de los intereses y aspiraciones de los beneficiarios del PEM.

A modo de síntesis diremos que el conocimiento, en la mayoría de las profesionales es "adecuado"; vale decir que la información que tienen sobre la problemática de la desocupación les permite un desempeño normal en los programas; que este conocimiento proviene de documentos internos y de la información de la prensa; sin embargo, el apoyo mayor lo constituye la experiencia del ejercicio profesional en otros servicios asistenciales del Estado y en algún perfeccionamiento adquirido a través de cursos generales de Servicio Social. No se encontró profesionales con conocimientos específicos sobre la materia: lo óptimo y lo insuficiente sólo se dieron como excepción.

La visión crítica de los Asistentes Sociales sobre los programas de Gobierno y so-

bre el propio quehacer profesional no se observa en todas las Municipalidades; así, en un tercio de ellas no se observó ninguna crítica y en el 50% se constató una actitud crítica frente al quehacer profesional.

Para explicar la escasa participación de los Asistentes Sociales en estos programas de desocupación se dan las siguientes razones: la primera es que los programas vienen totalmente normados desde el nivel ministerial y tienen asignados suficientes recursos huma-

nos y financieros; la segunda se refiere a que el PEM, como programa de campaña, es y debe ser transitorio, por lo tanto, no es importante ni significativo definir roles, acciones y estrategias, frente a él, y continúa siendo más importante que el Asistente Social se aboque, fundamentalmente, al desarrollo social.

A nuestro juicio existen otras causas que sería necesario profundizar. A ellas nos referiremos en un artículo próximo sobre el Servicio Social Municipal.

REVISTA MENSAJE

Un mensaje cristiano para el mundo de hoy.

En quioscos y librerías

Lea en el número de abril:

El Papa desde México

Nueva política brasileña

THOMAS SANDERS

Diálogo Norte-Sur

EDUARDO FREI

Antonio Gramsci y el marxismo

TOMAS VALDIVIA

Romería a Lonquén: Pasión del Señor

JOSE ALDUNATE

Cultura, Documentos, Libros.

Suscribase. Teléfono 60653